

No a los partidos políticos, sí a los “usos y costumbres”. La designación de autoridades municipales por sistema normativo propio en el municipio indígena de Ayutla de los Libres, Guerrero

Dra. I. Maribel Nicasio González

Escuela Superior de Antropología Social, Universidad Autónoma de Guerrero

marinigo@yahoo.com

Introducción

La designación de autoridades municipales por sistema normativo propio, en el municipio de Ayutla de los Libres, en Guerrero, dio un giro político radical entre los municipios y comunidades indígenas de la entidad, a partir del derecho a la libre determinación y el ejercicio de la autonomía municipal, pues se pasó del derecho escrito al ejercicio del derecho; como sujetos de derecho y no como objetos de derecho, que es como se les mira aún en México. El objetivo de la ponencia consiste en mostrar las razones del cambio de sistema de partido por el de “usos y costumbres” para designar autoridades municipales y el proceso seguido por la ciudadanía indígena de Ayutla de los Libres, en el ejercicio de sus derechos político-electorales en esta designación; y mencionar las repercusiones estatales de este ejercicio seminal. Es una revisión realizada desde la antropología social, como parte del proyecto de largo aliento, *Caleidoscopio. Innovaciones políticas y jurídicas de las comunidades indígenas que ejercen autogobierno para la transformación intercultural del Estado mexicano*.

El ejercicio de los derechos político-electorales de la población na savi (mixteca) y me phaa (tlapaneca) del municipio de Ayutla de los Libres, es una lucha que analizo desde dos vertientes. La primera es el ejercicio de la autonomía, y la segunda, la ciudadanía indígena. Respecto de la autonomía, ha sido revisada primordialmente desde el levantamiento zapatista del EZLN en 1994, luego con la administración y procuración de justicia de la CRAC-PC en 1995, como experiencias importantes. El común denominador es que se dio entre los pueblos originarios, quienes recuperaron sus prácticas políticas y jurídicas propias, los "usos y costumbres", y agregaron algunas otras de los sistemas políticos y jurídicos hegemónicos estatales, que les fueron útiles, dando lugar a la interlegalidad y la interpoliticidad. El

contexto general que da lugar a la autonomía de los pueblos originarios es el marco de la libre autodeterminación, misma que en la *Declaración de Quito* (1990) establece que

La autodeterminación es un derecho inalienable e imprescriptible de los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas luchamos por el logro de nuestra plena autonomía en los marcos nacionales. La autonomía implica el derecho que tenemos los pueblos indios al control de nuestros respectivos territorios, incluyendo el manejo de todos los recursos naturales del suelo, subsuelo y espacio aéreo...² Por otra parte, la autonomía significa que los pueblos indios manejaremos nuestros propios asuntos, para lo cual constituiremos democráticamente nuestros propios gobiernos (autogobiernos). (Citado en Aparicio, 2008:15)

La autonomía es un ejercicio colectivo que se realiza en los hechos, que en el caso de los pueblos originarios lo vienen practicando al margen de la anuencia de los Estados, como una posibilidad reconocida en el derecho internacional, aunada a los gobiernos que se dicen democráticos.

Para el ejercicio de los derechos políticos dentro de la democracia, en una sociedad pluricultural como México, los pueblos originarios están en el reclamo de ser considerados como sujetos de derecho, para practicar sus sistemas jurídicos, como lo establece el Convenio 169 y el artículo 2º constitucional, en el marco de la libre determinación. Es en este contexto que, en el caso de la *ciudadanía indígena*, existe un debate sobre las implicaciones de cómo deben ser considerados los derechos políticos de los grupos sociales marginados, como las mujeres, los pueblos indígenas o los discapacitados, entre otros, en el que se enfrentan la visión universalista contra el relativismo cultural. La discusión ha permitido incorporar reflexiones y propuestas analíticas respecto de cómo denominar a la ciudadanía de estos grupos sociales, entre las que se encuentran ciudadanía diferenciada (Esparza y Zambrano, 2021; Tamayo, 2006), ciudadanía multinacional o multicultural (Garzón, 2016), ciudadanía compleja (Villasante, 2017) o ciudadanía plena (Miyares, 2003). A partir de que la población indígena ejerce sus sistemas políticos y jurídicos, al margen del reconocimiento de parte del Estado mexicano, como resultado del pluralismo jurídico y político, hay un ejercicio de ciudadanía indígena, en el momento en que “un régimen especial que configura un gobierno propio (autogobierno) para ciertas comunidades integrantes, las cuales escogen así autoridades que son parte de la colectividad, ejercen competencias legalmente atribuidas y tienen facultades mínimas para legislar acerca de su vida interna y para la administración de

sus asuntos.” (López, 2006:55-56). Desde la perspectiva de Tamayo también implica “...una nacionalidad, región, provincia, municipio u otra entidad, integrada a un Estado, para gobernarse mediante normativas y poderes propios.”, que tendrían que regularse en las distintas normatividades (Tamayo, 2006:25). Estas ideas que se complementan, dan cuenta de una práctica sociojurídica contemporánea, legitimada o no por el Estado, existente entre los purépechas en Michoacán; los na savi y me’phaa en Guerrero; los tseltales en Chiapas o los mayas en Yucatán, Campeche y Quintana Roo. En los hechos, los pueblos originarios, comunidades políticas, se asumen como sujetos de derecho público, y no sujetos de interés público, una forma limitada como son concebidos para mantener privilegios de los partidos políticos y de la sociedad mexicana.

Finalmente, ante la ausencia de reconocimiento de una ciudadanía indígena, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Guerrero (IEPC GRO), refiere que para atender las demandas de los pueblos originarios y de las mujeres, han creado “acciones afirmativas”, que como la define el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), “son políticas públicas cuyo objetivo es compensar las condiciones que discriminan a ciertos grupos sociales del ejercicio de sus derechos. Se les conoce también como “acciones positivas”, “medidas positivas”, “discriminación en sentido inverso” y “discriminación positiva”” (INMUJERES, s/f), siendo el mecanismo para evitar una discusión de fondo sobre la ciudadanía de los pueblos indígenas.

Ubicación de Ayutla y población

El municipio de Ayutla de los Libres se encuentra en la región de la Costa Chica de Guerrero, es un municipio catalogado como indígena, debido a que el 41 % de su población se reconoce como indígena, perteneciente a los pueblos na savi (mixteco), me’phaa (tlapaneco) y nahua; y el 10 % como afromexicano y los demás como mestizos. Según el censo de 2020 (INEGI, 2021), la población municipal era de 69,123 habitantes, de ellos, 28,779 se adscriben como indígenas y 6,947 como afromexicanos. La población mestiza se concentra en la cabecera municipal y algunas comunidades vecinas hacia el sur del municipio.



Mapa IEPC Guerrero, 2015.

La urbanización de Ayutla se debe a la migración intramunicipal, de las comunidades rurales a la incipiente zona urbana entre 2000 y 2005 (Berber, 2017:42), debido al desplazamiento por conflictos agrarios y la venganza, el acceso a educación media y superior, y a empleo. Además del cambio de la sede de la junta distrital electoral del distrito 08 del IFE, que se estuvo en Ometepec hasta agosto de 2005 en que se realizó una redistribución, y pasó a Ayutla. Este municipio se ve desde el gobierno del estado como estratégico, en términos administrativos, por su ubicación geopolítica, al encontrarse en el centro de la región Costa Chica, incrementando el presupuesto municipal para su desarrollo urbano.

Contexto sociopolítico

A nivel de cabecera municipal existen algunas familias que históricamente han detentado el poder económico y político, íntimamente vinculadas al PRI, de donde han salidos los

presidentes municipales y la mayoría de los funcionarios del ayuntamiento. Son ayuntamientos que han invertido poco en la zona rural, con prácticas discriminatorias hacia la población indígena, (Nicasio, 2020), razones por las cuales se vio como una estrategia política para enfrentar al poder municipal, el acercamiento al PRD como un partido de oposición, al que se incorporó principalmente el magisterio.

En 2012 algunas ciudadanas y ciudadanos de la cabecera municipal de Ayutla, simpatizantes de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero, Movimiento por el Desarrollo y la Paz Social (UPOEG), se acercaron al líder de la UPOEG -Bruno Plácido Valerio-, y a quien fungía como abogado comunitario -Manuel Vázquez Quintero-, ambos originarios del municipio vecino de San Luis Acatlán, para pedir su apoyo en la solicitar de designación de autoridades municipales por “usos y costumbres”. Los dos representantes adquirieron experiencia en la defensa de sus derechos político-electorales, al presentar la misma solicitud de 17 municipios de las regiones Costa Chica, Montaña y Centro, siendo aprobada sólo la de San Luis Acatlán (SUP-JDC-1740/2012-inc1). El Instituto Estatal Electoral de Guerrero (IEEGRO) se vio obligado a atender la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TRIFE), buscando que se realizara un peritaje antropológico en 2013 y organizando una consulta a la ciudadanía en 2015. Estas dos etapas se convirtieron en Guerrero en el procedimiento a seguir por la institución electoral, en las subsiguientes solicitudes de designación de autoridades por “usos y costumbres” que continuaron llegando.

Es así como en 2014 Ayutla vuelve a realizar la solicitud de designación de autoridades para el siguiente proceso electoral de 2015, preocupados por la forma abusiva en que el nuevo presidente municipal usufructuaba el erario público, realizaban obras y servicios a las comunidades con limitaciones y altos presupuestos, incremento de la delincuencia, y nepotismo (Nicasio, 2020). Esta solicitud se resolvió en 2016, dos años después.

A estos hechos hay que agregar que Ayutla estaba sumida en un contexto de inseguridad, que fue escalando en el campo y la ciudad, razón que dio lugar a que la ciudadanía, por una parte, solicitara su incorporación a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) y asumir la seguridad; y por otra, en 2013 la UPOEG también dota de seguridad a localidades que no estaban con la CRAC-PC. La pertenencia de las comunidades a estas dos instancias, permitió que su estructura organizativa propiciara la

discusión comunitaria para designar autoridades municipales al margen de los partidos políticos, en el campo y la ciudad.

Respecto de los partidos políticos, después de años de control priista, aunque la oposición se hizo presentes con el PRD en 1996, convirtiéndose en multipartidismo en 2012, con el PVEM, no hubo cambios en la manera de atender a las comunidades indígenas; por el contrario, el PVEM, en el periodo 2012-2018 -representados por Severo Castro y su esposa Hortencia Aldaco-, dieron lugar a un mayor nepotismo, asignación de obras a sus empresas constructoras, arrendamiento de parque vehicular y de equipo cibernético a empresas de familiares, obras inconclusas y a sobre precio, además de servirse de un grupo de jóvenes delincuentes. Esta situación, fue la que propició la incorporación de la CRAC y la UPOEG en la discusión, usando su estructura organizativa para politizar a la ciudadanía en sus comunidades a favor de los “usos y costumbres”, como la alternativa ante la inseguridad y el abuso político de las autoridades municipales. Fue tanto el abuso de las autoridades civiles, que la propia ciudadanía mestiza de la cabecera municipal, estuvo de acuerdo con votar a favor de la consulta por los “usos y costumbres”, para sacar a la familia verde, como designo al marido y mujer que fueron autoridades municipales por el PVEM.¹

La solicitud de designación de autoridades por “usos y costumbres”

Ciudadanas y ciudadanos de Ayutla presentaron la solicitud ante el IEPC Gro como autoridad electoral, la cual dilató a propósito seis años, para establecer el procedimiento a seguir, porque no existía y por el apoyar al PRI, para que el control de la designación de autoridades municipales no saliera del ámbito del sistema de partidos. Después de un trabajo político fuerte de la ciudadanía simpatizante de los “usos y costumbres”, de la CRAC-PC y de la UPOEG, a nivel comunitario y en las regiones indígenas, el resultado en las asambleas comunitarias de consulta, organizadas por el IEPC Gro, el sí triunfó por algunos votos más que el no, dejando una fuerte presión política para las nuevas autoridades indígenas.

La lucha jurídica dada por el joven abogado comunitario na savi, Manuel Vázquez Quintero, desde la solicitud de información al IEEGRO, hasta llegar a ganar la demanda de protección de derechos político-electorales en el TRIFE, fue un conocimiento del camino jurídico a

¹ Una descripción puntual del conflicto y desarrollo de la organización comunitaria, puede encontrarse en la tesis de licenciatura de Yolotzin Juárez Flores (2019).

seguir para la solicitud de Ayutla en la designación de autoridades municipales por “usos y costumbres”.

Un señalamiento puntual del recorrido jurídico realizado en la demanda de los derechos político-electorales, se encuentra en el cuadro elaborado por Guassens (2019), donde se observan los procedimientos, las instancias electorales involucradas, los tiempos tomados entre evento y evento y el resultado de la gestión jurídica.

Fecha	Suceso	Municipio	Resultado
27/02/12	Solicitud al instituto local	-	Negativo
22/03/12	Solicitud al instituto local	Varios	Negativo
9/06/12	Demanda de juicio ante el TEPJF	San Luis Acatlán	Positivo
13/03/13	Sentencia del TEPJF en el juicio ciudadano SUP-JDC-1740/2012	San Luis Acatlán	Positivo
20/08/13	Peritaje antropológico	San Luis Acatlán	Positivo
26/06/14	Solicitud al instituto local	Ayutla	Negativo
8/10/14	Sentencia del TEPJF en los juicios SUP-JDC-525/2014 y SUP-JDC-2066/2014	San Luis Acatlán	Positivo
2-15/02/15	Consulta popular	San Luis Acatlán	Negativo
28/05/15	Solicitud al Instituto local	Ayutla	Negativo
25/06/15	Sentencia del TEPJF en el juicio ciudadano SDF-JDC-545/2015	Ayutla	Positivo
20/08/15	Peritaje antropológico	Ayutla	Positivo
17-18/10/15	Consulta popular	Ayutla	Positivo
29/07/16	Sentencia del TEPJF en el juicio SDF-JDC-295/2016 y acumulado	Ayutla	Positivo
1/02/17	Decreto 431 del Congreso local	Ayutla	Negativo
Fecha	Suceso	Municipio	Resultado
9/05/17	Acuerdo 022 del instituto local	Ayutla	Negativo
10-11/06/17	Segunda consulta popular	Ayutla	Positivo
15/07/18	Elección por usos y costumbres	Ayutla	Positivo

Pierre Guassens (2019) “El papel del Tribunal Electoral Federal en la contienda por usos y costumbres en la Costa Chica de Guerrero”, pp. 40-41.

Razones del cambio en la designación de autoridades

Las motivaciones precisas por las que las comunidades indígenas quieren dejar a un lado el sistema de partidos, tiene que ver con años de conocerlo, de haber sido usados por el otrora partido de Estado, el PRI, y luego por los partidos nacionales y estatales, -que en algunos casos, como el PRD cuando llegó como oposición al PRI, se comprometieron con las comunidades- replicando lo que el PRI hizo: corrupción, abuso y enriquecimiento inexplicable de los principales funcionarios; un trato discriminatorio y de marginación hacia la ciudadanía indígena; rezago y pobreza comunitaria y municipal.

Con la experiencia de líderes indígenas de las luchas de la década de los años 90 del siglo pasado, y de la incorporación de un grupo de jóvenes indígenas formados en el liderazgo a nivel nacional, las apuestas políticas construidas desde el marco de la libre determinación, han dado lugar a que las demandas sean concretas, buscando construir en los hechos, las siguientes reivindicaciones políticas, basados en un andamiaje jurídico, que es el que los gobiernos estatales y federal entienden:

- Decidir, acceder y desarrollar obras, servicios y recursos en las comunidades y colonias urbanas
- Abatir la falta de urbanización de las comunidades rurales y pequeñas
- Contar con representación de los pueblos originarios en el sistema de autoridad municipal
- Competir por la autoridad municipal con candidatos indígenas
- Participar en la toma de decisiones en los distintos espacios de autoridad municipal
- Propiciar la participación de las mujeres, jóvenes y profesionistas locales, en tareas administrativas e instancias municipales
- Marginar a partidos políticos de la administración municipal
- Gobernar a partir de la democracia participativa

Argumentación jurídica para el cambio de la forma de designar autoridades municipales

El sustento jurídico para la exigencia de los derechos políticos de la ciudadanía indígena,

parte del derecho internacional *Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes* de la OIT, la *Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígena*; de normas nacionales, artículos 2º y 39º de la *Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos*; y normas estatales, la *Ley 701 de Reconocimiento, derechos y cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero*.

En el reclamo por los derechos políticos, está claro que la organización comunitaria es indispensable, como la otra fuente de poder para lograr que lo jurídico avance, teniendo que mostrar el músculo comunitario, y presionar las distintas instancias de autoridad electoral del Estado, para que cumplan, por ejemplo, con los tiempos jurídicos establecidos en las normas o simplemente, la aplicación de las normas. Es por eso que recuperar la experiencia y avance de las comunidades de Oaxaca, y la más contemporánea de Cherán, Michoacán. Donde se luchó por los derechos políticos, además de enfrentar a los talamontes ilegales, con una participación muy importante de las mujeres.

Las instituciones electorales

Para atender la solicitud de designación de autoridades por usos y costumbres en el caso de Ayutla, fueron nominativamente dos instancias las involucradas – el Instituto Estatal Electoral de Guerrero y el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana–, pues en 2014, con la reforma electoral de Enrique Peña Nieto, se transformó. Aunque el objetivo institucional en aquellos momentos fue el mismo: mantener el sistema de partidos, para proteger los privilegios y canonjías de los partidos políticos.

Es necesario considerar también las acciones en el caso de San Luis Acatlán, pues exhiben la postura del IEEG. A pesar de que el municipio también es definido como indígena, y que el peritaje antropológico no hizo más que reiterarlo con la descripción del sistema de autoridades comunitarias y prácticas políticas ese carácter, el presidente del IEEG dijo que no existían; además de crear un conflicto por una declaración de la perita a la prensa, para alargar los tiempos, y que el peritaje quedara en controversia, para deslegitimarlo como prueba. Estas acciones lograron en el caso de Ayutla retrasar seis años su legítimo derecho a designar autoridades por “usos y costumbres”, lográndose así dilatar el ejercicio de la libre determinación de los pueblos, respecto a cómo gobernarse municipalmente.

Un listado de las distintas acciones de diferimiento en el caso de Ayutla y San Luis Acatlán

- Postergar los tiempos de respuesta a las solicitudes
- Posponer las sentencias del TRIFE, por parte de la instancia electoral y del congreso local (inejecución de sentencia)
- Ausencia de representantes de partido para la toma de acuerdos “colegiados”
- Campaña informativa a la ciudadanía de limitación en el presupuesto
- Solicitud de presupuesto al Congreso estatal, para la implementación de actividades en los municipios solicitantes
- Organización de elecciones próximas
- Organización y desarrollo de la consulta
- Análisis del dictamen pericial

Por otra parte, hay que tener claro que el espacio electoral local ha sido un espacio que se ha prestado a la manipulación del gobierno en el poder, usándolo para designar a alguien de la entera confianza del gobernador y partido en turno. Además de que existía entre los funcionarios electorales, un desconocimiento de las prácticas sociopolíticas de los pueblos originarios, su cosmovisión, identidad; de la interculturalidad como práctica en países pluriculturales como México, en el ámbito jurídico y político; y de que desde el gobierno y la mirada de muchos funcionarios, los pueblos originarios y afromexicanos son menores de edad políticos, que desconocen qué y cómo se hace la política; cómo se realiza la administración de recursos; reproduciendo prácticas indigenistas de protección, cuidado y abuso institucional.

La Honorable Casa de los Pueblos de Ayutla de los Libres, en lugar del Honorable Ayuntamiento

En la asamblea municipal realizada el 15 de julio de 2018, se dio continuidad a un ejercicio de politización de la ciudadanía indígena de Ayutla, al decidir la manera como se querían gobernar.

El cuerpo de autoridades se concentra en el Concejo Municipal Comunitario de Ayutla de los Libres, representado por tres coordinadores, uno por cada pueblo originario -na savi (mixteco), me’phaa (tlapaneco) y mestizo-; y la máxima instancia de autoridad municipal es

la Asamblea Municipal Comunitaria de Representantes y Autoridades de Ayutla de los Libres, con representantes propietarios y suplentes de 123 comunidades rurales y urbanas. El trabajo de creación de las estructuras, formas de representación, equidad de género (Valladares, L. y Tabares, G., s/f); luego la relación de las autoridades con las comunidades en la zona rural y en la zona urbana; más tarde el vínculo con las instancias estatales y federales, fueron los retos a resolver. Así es como se inicio un camino de formación y capacitación para mujeres y hombres, que como en cualquier otro espacio de autoridad, mestizo o indígena, se tuvo que aprender, con los aciertos y errores que el proceso implica. Uno de los principales logros al final de la gestión de tres años del Consejo Municipal Comunitario y de la Asamblea Municipal Comunitaria de Representantes y Autoridades, fue el desarrollo de tres obras urbanas en cada una de las 140 comunidades del municipio, obras definidas y priorizadas por la comunidad, lo que se ha convertido en uno de los principales logros, que en un plazo de tres años consiguieron, como no había ocurrido durante más de 67 años del PRI en el poder, ni con el PRD que llegó en 1996 como oposición. Tras un trabajo arduo de las mujeres, se logró una representación paritaria de mujeres y hombres al interior del Consejo Municipal Comunitario; conformando las distintas comisiones, no sin una capacitación para generar las identidades femeninas y étnicas, fortalecer los liderazgos y aprender a asumir espacios de poder municipal y comunitario (Tabares, 2022). Aquilatar de manera plena los logros intramunicipales es una tarea pendiente.



Mujeres representantes de las comunidades de Ayutla. Fotografía Heriberto Paredes (2019).

Fuente: *Tercera Vía.Mx*

Conclusiones

La lucha por el acceso a recursos y al poder municipal que empezó como un sueño, se convirtió en la semilla política, para que otros municipios y comunidades siguieran el camino de Ayutla. En primer lugar, el municipio vecino de Tecoanapa, que aspiró a designar autoridades por “usos y costumbres”, donde el logro obtenido en términos políticos, consistió en que al no ser un municipio indígena, se pudo mostrar que por tener una ascendencia como pueblo originario, yope, es una “comunidad equiparable a pueblo indígena”, abriendo la posibilidad a que otros municipios puedan realizar el reclamo por esta vía.

En ambas experiencias el peritaje antropológico jugó un papel importante (Nicasio y Torres, 2015), al ser una herramienta jurídica que coadyuvó a consolidar la demanda de sus derechos político-electorales, ante las instancias electorales, que ya es tomado en cuenta, por éstas, como por la ciudadanía indígena.

Otras repercusiones consisten en el interés de la ciudadanía cercana a la UPOEG, del municipio de Tecoanapa, a través del Concejo Ciudadano de Autoridades Civiles y Agrarias de Tecoanapa pidieron en 2017 designar a sus autoridades por “usos y costumbres”, reconociéndoles su calidad como “comunidad equiparable a pueblo indígena”, pero que

tampoco se consolidó en la consulta, por la injerencia de las autoridades municipales del PVEM en turno. La nueva solicitud que realizó San Luis Acatlán en 2021, pero que, al cambiar el contexto sociopolítico, se volvió a perder en la consulta. Una experiencia más es la del nuevo municipio de San Nicolás, municipio afroamericano, desprendido del de Cuajinicuilapa, aprobado en 2023, el cual está por designar a su ayuntamiento instituyente, con el interés de que en los comicios de 2024, designen a sus autoridades municipales por sistema normativo propio, que es como lo designa la institución electoral. Finalmente, la última solicitud de creación de nuevos municipios la están realizando cinco comités gestores de la Costa Chica, de los cuales cuatro son indígenas, Chimalapa (na savi), Huixtepec (nancue ñomndaa), Pueblo Hidalgo (me'e phaa) y San Cristóbal (na savi); y uno afroamericano, Huehuetónoc.

La creación de nuevos municipios, es la vía que ven los pueblos indígenas y afroamericanos de Guerrero, para acceder al presupuesto, de modo que puedan administrarlo y abatir el gran rezago de servicios y urbanización que viven desde hace más de 60 años. En contraste con el camino seguido por las comunidades purépechas de Michoacán, que pueden acceder ahora, después de varios años de lucha, a la administración directa de la parte proporcional del presupuesto municipal.

Por eso los pueblos indígenas en el siglo XXI, dicen “No a los partidos políticos, sí a los usos y costumbres”.

Bibliografía

Aparicio, M. (2009) “La libre determinación y la autonomía de los pueblos indígenas. El caso de México”, *Boletín mexicano de derecho comparado*, (42)124, enero-abril, México, pp. 13-38. Disponible en <https://www.scielo.org.mx/pdf/bmdc/v42n124/v42n124a1.pdf> [Consultado 28-08-2023]

Berber Cruz, M. Á. (2017) *Paz en la guerra: Microhistoria del movimiento de autodefensa y etnografía sobre la disminución de la violencia en Ayutla de los Libres, Guerrero*, tesis de licenciatura en Política y Administración Pública, Colegio de México.

Esparza, E.; Zambrano, J. P. (2021) “Ciudadanía diferenciada e igualdad: una relación a debate”, *Revista Jurídicas*, 18(2), pp. 127-140. Disponible en

<https://revistasoj.s.ucaldas.edu.co/index.php/juridicas/article/view/6617> [Consultado 1-09-2023]

Garzón, P. (2016) *Ciudadanía indígena: Del multiculturalismo a la colonialidad del poder*, Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.

Gaussens, P. (2019) “El papel del Tribunal Electoral Federal en la contienda por usos y costumbres en la Costa Chica de Guerrero”, *Justicia electoral y derechos humanos. Incidencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la protección de los derechos humanos*, TRIFE, pp. 35-50.

INEGI (2021) Demografía y sociedad. Disponible en <https://www.inegi.org.mx/temas/lengua/> [Consultado el 5-08-2023]

INMUJERES (s/f) “Acciones afirmativas”, *Glosario para la igualdad. Consulta en línea*. Disponible en <https://campusgenero.inmujeres.gob.mx/glosario/terminos/acciones-afirmativas> [Consultado 29-08-2023]

Juárez Flores, Y. (2019), *Donde la asamblea manda, el gobierno obedece. Elección por usos y costumbres en Ayutla de los Libres, Guerrero*, tesis de licenciatura en etnología, Escuela Nacional de Antropología e Historia.

López Bárcenas, F. (2006) *Autonomía y derechos indígenas en México*, Bilbao: Universidad de Deusto.

Miyares, A. (2003) *Democracia feminista*. Madrid: Cátedra.

Nicasio González, M. y Torres Rodríguez, J. J. (2015) *El dictamen pericial antropológico y los sistemas normativos indígenas en el municipio de Ayutla de los Libres, Guerrero, Chilpancingo*.

Nicasio González, M. (2020) “Convergencias y divergencias organizativas y políticas en la designación de autoridades municipales por “usos y costumbres” en Ayutla de los Libres, Guerrero”, *Revista Mexicana de los Movimientos Sociales*, 4 (2) julio-diciembre, pp. 136-147.

Paredes, H. (2019) “Tenemos voz, tenemos votos y tenemos opinión: mujeres en el nuevo gobierno comunitario de Ayutla”, *Tercera Vía.Mx*, 20 de marzo. Disponible en <https://terceravia.mx/2019/03/tenemos-voz-tenemos-voto-y-tenemos-opinion-mujeres-en-el-nuevo-gobierno-comunitario-de-ayutla/> [Consultado 25-08-2023]

- Tabares, G. (2022) “Del H. Ayuntamiento a la Honorable Casa de los Pueblos: Concejo Municipal Comunitario de Ayutla de los Libres”, *Alteridades* (32)64, pp. 59-70. Disponible en https://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S0188-70172022000200059&script=sci_abstract [Consultado 20-08-2023]
- Tamayo, S. (2006) “Entre la ciudadanía diferenciada y la ciudadanía indígena ¿otra es posible?”, *El Cotidiano*, 21(137), Ciudad de México: UAM Azcapotzalco, pp. 7-17.
- Valladares de la Cruz, L.; Tabares Merino, G. (s/f) “7. Ejerciendo autonomía: las mujeres del gobierno municipal comunitario de Ayutla de los Libres”. Disponible en <https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/15/7120/9.pdf> [Consultado 20-08-2023]
- Villasante, R. (2017) “Michael Walzer: la igualdad compleja y ciudadanía inclusiva”, *Miscelánea Comillas. Revista de Ciencias Humanas y Sociales*, (75)147, Madrid: Universidad Pontificia Comillas, pp. 351-380. Disponible en <https://revistas.comillas.edu/index.php/miscelaneacomillas/article/view/8429/8010> [Consultado 20-08-2023]
- Justia (2012) “Sentencia SUP-JDC-1740/2012-inc1”, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación <https://docs.mexico.justia.com/federales/sentencias/tribunal-electoral/2014-04-23/sup-jdc-1740-2012-inc1.pdf>